

Boletín de IMASEN, julio de 1993

Credibilidad y buen gobierno

Que la regla número uno del buen gobierno es la credibilidad, es algo que las largas crisis institucionales que ha vivido el país en su vida política contemporánea parecen siempre reiterar.

Sobre este punto y sus implicaciones en el presente escribe para Imasen Confidencial el doctor Francisco Sagasti, exjefe de Planeamiento del Banco Mundial y especialista en temas de gobernabilidad.

No de los requisitos esenciales para el buen gobierno es la *credibilidad* de quienes tienen la responsabilidad de la conducción política del país. Varios factores se combinan para determinar el grado de credibilidad de un gobierno y sus integrantes. El primero es la *transparencia* en el ejercicio de la autoridad gubernamental, que implica el acceso a la información sobre cómo se está gobernando y sobre las razones detrás de las principales decisiones políticas. El segundo se refiere a la *claridad de los objetivos* del gobierno y medios para lograrlos, lo cual exige una definición de estrategias y prioridades y su amplia difusión. El tercero es *demonstrar que se cumple lo que se ofrece en los plazos previstos*, evitando hacer promesas incumplibles para obtener divi-

dados políticos. El cuarto es el *comportamiento ético y responsable* que debe caracterizar a todo gobernante y a su equipo. Un último factor se refiere a la necesidad de que los gobernantes *digan en todo momento la verdad*, por más desagradable e impopular que esto pueda ser.

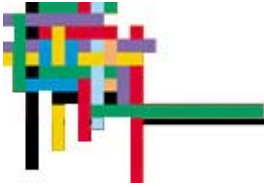
En un mundo cada vez más interconectado y saturado de información, la evaluación que hacen la ciudadanía y la comunidad internacional de un gobierno depende, en gran medida, de su credibilidad y, por lo tanto, de la actitud que tome este frente a cada uno de los factores que la condicionan. Debido al desgaste natural que produce el ejercicio del poder político, la credibilidad de los gobernantes es un atributo difícil de mantener, sobre todo después de varios años de gobier-

no, y debe ser celosamente cautelada.

Los problemas que se han ido acumulando durante los tres años y medio del gobierno actual, y sobre todo después del autogolpe del 5 de abril de 1992, están llevando a una crisis de credibilidad de consecuencias imprevisibles. En el ámbito político, además del mismo autogolpe y su secuela de contradicciones, se tienen los vaivenes y súbitos cambios de dirección en la elaboración de la nueva Constitución (por ejemplo, en descentralización, educación gratuita, reelección de congresistas); la falta de información acerca de las funciones y de la responsabilidad de algunos funcionarios gubernamentales del más alto nivel; la poco clara relación entre el gobierno y la cúpula de las Fuerzas Armadas; el uso del aparato estatal con fines electorales y las promesas incumplidas de informar sobre las fuentes de financiamiento de la campaña por el «SÍ».

En el ámbito económico son evidentes las vacilaciones y contradicciones en torno al sistema tributario, a la negociación de la deuda externa con la banca privada, y a las características y el uso del FONAVI; así como las numerosas promesas incumplidas en cuanto al financiamiento externo (por ejemplo, los 800 millones de dólares que iban a llegar para los secto-





res sociales después de la reunión de Mesa de Donantes en París en abril de este año, los 2.000 millones de dólares de inversión privada extranjera que «llegarían al día siguiente que se apruebe la nueva Constitución»). Estos hechos demuestran la carencia de objetivos y estrategias claras, así como una propensión a hacer promesas incumplibles para obtener dividendos políticos.

La falta de transparencia y las contradicciones del gobierno —así como el engaño, la irresponsabilidad y el comportamiento cínico de algunos de sus representantes— se han puesto en evidencia claramente en el tema de derechos humanos y en la lucha antisubversiva, específicamente en el caso La Cantuta/Cieneguilla/Huachipa. Algunos representantes del oficialismo negaron hechos debidamente comprobados, obstruyeron la administración de justicia y acusaron a quienes defienden el respeto a los

derechos humanos. Sin embargo, al final el gobierno ha tenido que cambiar de posición y aceptar la participación de algunos elementos de las Fuerzas Armadas en la matanza de sospechosos de terrorismo. Por otra parte, las inconsistencias e incongruencias del gobierno se muestran también en la actitud triunfalista en la lucha antisubversiva, que no concuerda con la persistencia de la violencia terrorista; así como en el desconcertante manejo de las relaciones entre el gobierno y los cabecillas presos de Sendero Luminoso, con quienes se intercambia cartas por mensajes y regalos de cumpleaños sólo unos meses después de presentarlos como si fueran enjaulados que no merecen la vida.

Todo esto pone en evidencia serias deficiencias en cuanto a los factores que definen la credibilidad del gobierno. No existe el grado de información imprescin-

dible para el escrutinio de la acción gubernamental, no se aprecia una claridad de objetivos y medios, no se cumplen las promesas, empieza a cuestionarse la idoneidad moral de algunos allegados al gobierno, y la discrepancia entre pronunciamientos y acciones se acentúa.

No se puede gobernar en democracia sin tener credibilidad y sin el respeto de toda la ciudadanía (que no deben confundirse con la popularidad en las encuestas). Los intentos de hacerlo conducen al desprestigio o al autoritarismo, tal como lo demuestran las experiencias del último decenio. Los peruanos debemos exigir que nuestros gobiernos actúen en forma transparente, que nos propongan estrategias y políticas coherentes, que cumplan lo que ofrecen, que se comporten de manera ética y que digan la verdad. Es decir, debemos exigir el derecho a creer en nuestros gobiernos.